

II. Marco conceptual

1. Política social y gasto social

La política social abarca al conjunto de actividades relacionadas con el diseño e implementación de estrategias orientadas a mejorar la calidad de vida de la población de un país, región o localidad. Considera, por tanto, una amplia variedad de sectores, los más comúnmente reconocidos son salud, educación, trabajo y seguridad social. Sin embargo, también suelen incluirse en dicho marco a sectores comúnmente identificados más con la infraestructura física, pero que tienen objetivos directamente asociados a los de la política social, como es el caso de la vivienda, agua potable y alcantarillado, transporte y comunicaciones.

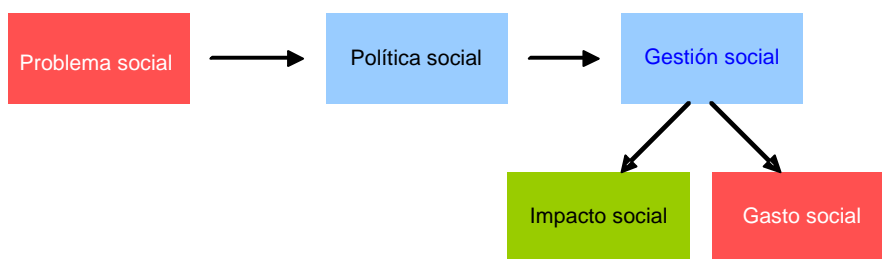
A la política social se la identifica a su vez con la atención a grupos vulnerables de la población (niños y jóvenes, mujeres, ancianos, indígenas, pobres e indigentes, etc.) y con el objetivo de proteger los derechos sociales, económicos y culturales de las personas.

Una visión proveniente de la economía remarca que la política social sería la encargada de apoyar a la población que no logra alcanzar los beneficios del desarrollo económico, una suerte de regulador de efectos negativos o mitigadores de daños.

Más allá de los distintos énfasis, lo que está claro es que dentro de la política social se incluyen todas aquellas intervenciones que tienen como objetivo último solucionar o minimizar los efectos de los problemas sociales, sean estos una carencia o restricción para el desarrollo de las capacidades individuales, una situación de conflicto entre distintos grupos o la conculcación de uno o más derechos.

La política social se operacionaliza a través planes, programas, proyectos y normas, en los que se definen el qué y el cómo. La gestión social constituye el sistema de decisiones que involucra los procesos y estructuras organizacionales a través de los cuales ésta política se implementa. Si la política es la definición, la gestión es la acción; la primera da el sentido y la segunda diseña e implementa los procesos, no es posible entender una sin la otra.

DIAGRAMA 1
RELACIÓN ENTRE POLÍTICA Y GASTO SOCIAL

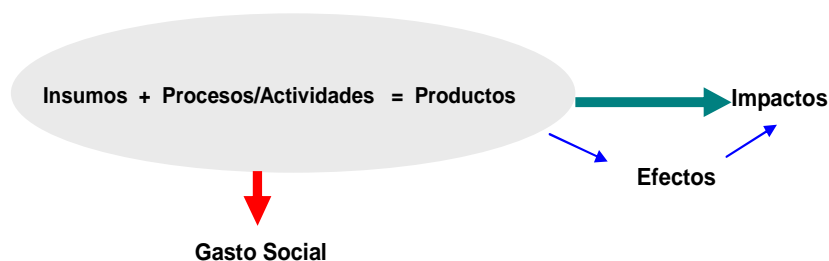


Fuente: Elaboración propia.

La política sólo se justifica por el impacto alcanzado y su operacionalización supone el uso de recursos, por tanto conlleva costos. Así, los resultados de la política no pueden analizarse de manera independiente de los costos incurridos y viceversa, razón por la cual la evaluación del impacto y la eficiencia son requisitos complementarios para la toma de decisiones en la política social. El impacto social se mide a través de las variaciones que se producen en los indicadores de los problemas que justifican cada política y en los beneficios económicos directos e indirectos que se transfieren a la población. Por su parte, el análisis del costo supone la cuantificación económica de los recursos involucrados en la inversión y operación de dicha política.

La lógica que está a la base es la del proceso productivo de la gestión social. Este considera que a partir de los objetivos perseguidos (solucionar problemas sociales) la política social, a través de normas, planes, programas y proyectos define áreas de intervención y productos para distribuir a la población objetivo a fin de alcanzar un impacto. Los productos resultan de la implementación de procesos de gestión que articulan actividades orientadas a transformar los insumos básicos (recursos, físicos, humanos, financieros), con procedimientos, normas y reglas definidos. En algunos casos, el impacto que se busca generar en la población supone un paso intermedio de cambios de conducta asociados a los productos (efectos). Como contrapartida, dicho proceso genera un costo o gasto.

DIAGRAMA 2
EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA GESTIÓN SOCIAL



Fuente: Cohen E., Martínez R. (2004) "Manual. Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales".

2. Los impactos de la gestión social

Como se menciona en la sección anterior, para un análisis integral de la gestión social no es suficiente contar con información confiable del gasto social sino también de los impactos que generan en la población objetivo los bienes y servicios producidos y distribuidos con dichos recursos.

El impacto de la gestión social puede ser analizado de tres maneras diferentes pero complementarias:

- El impacto redistributivo normalmente hace referencia a la valoración económica de los bienes y servicios que son transferidos a la población, y se mide como la incidencia que dicha valoración tiene en el ingreso total de los hogares. Este permite identificar el grado de transferencia de recursos entre los hogares y dimensionar la progresividad o regresividad del gasto.
- El impacto social representa la variación en los indicadores sociales que justifican la implementación de acciones en cada función (salud, educación, etc.) y se mide como el cambio que se presenta en la población objetivo entre la situación previa a la implementación de una determinada gestión social (ex-ante) y la alcanzada como resultado de ésta (ex-post).
- El beneficio económico producido por los impactos sociales generados por los bienes y servicios transferidos a los hogares, cuantificados en términos del incremento en activos y del potencial productivo resultante.

Así por ejemplo, se espera que un programa de alimentación infantil genere: un impacto redistributivo, equivalente al valor de mercado de la ración de alimentos que se entrega al hogar, un impacto social en términos de la menor probabilidad de desnutrición que alcanzan quienes reciben los alimentos y un beneficio económico equivalente a los potenciales mayores ingresos que se generan a dichos menores en tanto un mejor estado nutricional disminuye el riesgo de enfermedades y aumenta las probabilidades de logro educacional e ingresos a largo plazo.

Los indicadores relevantes para este análisis dicen relación con:

- Las características sociales, económicas, culturales, geográficas y etáreas de la población objetivo de los planes, programas y proyectos sociales que se implementan en un país.
- Las características propias de la gestión de dichos planes, programas y proyectos, identificando: alcance geográfico, definición cualitativa, volumen de productos (bienes o servicios) que se producen y distribuyen, cobertura y focalización.
- Estimaciones de efectos e impactos alcanzados por los programas en la situación social de la población.

3. El concepto de gasto social

De acuerdo a la definición del FMI¹⁰, *gasto* es una disminución del patrimonio neto producto de una transacción. Los gobiernos gastan para cumplir dos funciones económicas generales: asumir la responsabilidad de proveer ciertos bienes y servicios a la comunidad sobre asignaciones no mercantiles y redistribuir el ingreso y la riqueza mediante pagos de transferencia. Estas funciones se cumplirían básicamente mediante disminuciones del patrimonio neto, es decir, por medio de un *gasto* (FMI, 2001).

¹⁰ Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas 2001. Fondo Monetario Internacional.

A partir de la definición antes detallada, parte del gasto efectuado por los gobiernos tiene un sentido social, entonces el tema es saber que se entiende por gasto social. La OECD define gasto social como “La provisión de beneficios por parte de instituciones públicas y privadas dirigidas a los hogares e individuos en orden a brindar soporte en circunstancias adversas que afectan su bienestar. Tales beneficios pueden ser transferencias en efectivo o la entrega directa (en especies) de bienes y servicios siempre que no constituyan pagos directos para bienes o servicios específicos ni contratos o transferencias individuales¹¹” (OECD, 2005).

La definición desarrollada por la OECD, aparece como bastante aplicable a América Latina y el Caribe, pero en esta región las funciones sociales cubren más que las categorías consideradas por la OECD¹², por lo tanto, esta ampliación de la cobertura de lo “social” diferenciaría la medición que se obtendría en los países de la región si se compara con las mediciones registradas en la base de este organismo.

En general, el concepto de gasto social utilizado en finanzas públicas hace referencia a los recursos destinados por el Estado para la provisión de bienes y servicios en distintos sectores sociales, principalmente en educación, salud, vivienda y previsión y recibe el nombre de gasto público social.

A diferencia del concepto de inversión que hace referencia a un cambio en la estructura del patrimonio, un gasto implica una pérdida en su valor. En distintos ámbitos hay una tendencia a hablar más en términos del primero que del segundo. Aunque nos parece relevante tratar este punto, en este documento no se profundiza en dicha discusión y se habla indistintamente de gasto o inversión social.

Las definiciones nominales de gasto social con las que trabajan los países de la región no difieren mayormente, pero existen diferencias metodológicas y conceptuales que tienen consecuencias para la comparabilidad de las cifras. Por ejemplo, en Perú el gasto social es definido como aquel “realizado por el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, para proveer bienes y servicios públicos o privados, con el fin de buscar el aseguramiento universal o selectivo de un conjunto de derechos sociales de la población¹³”, mientras que en Brasil se define como “el total de recursos financieros brutos provistos por el sector público (costo de bienes, servicios y transferencias, independiente de su fuente de financiamiento o valor de recuperación). Comprende todos los programas sociales de carácter público, y que incluyen aquellos gastos ejecutados por órganos de administración indirecta que disponen de recursos propios¹⁴”.

Dichas definiciones no hacen referencia directa a los sectores sociales donde se destinarán los recursos. En contraste, el gasto público social en Argentina se define como “aquel gasto destinado a brindar servicios de educación, salud, servicios sanitarios y vivienda, a realizar políticas compensatorias destinadas a población carenciada y a garantizar los seguros sociales, que incluyen la previsión social, las obras sociales, las asignaciones familiares y los seguros de desempleo¹⁵”.

En el caso de Paraguay se utiliza el concepto de inversión social, la que está constituida por los recursos que el Estado asigna a la reducción de la pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la potenciación del capital humano del país. El seguimiento mensual a la

¹¹ OECD. Net social expenditure, 2005 edition. More comprehensive measures of social support. Willem Adema and Maxime Ladaïque. Pág 7.

¹² Las categorías medidas por la OECD están incorporadas en la función de protección social del Clasificador de las Funciones del Gobierno COFOG.

¹³ Boletín de Transparencia Macrosocial, marzo 2005, MEF, Perú.

¹⁴ Atualizacao da metodologia para dimensionamento do gasto social federal”, IPEA, 2006.

¹⁵ Ministerio de Economía y Producción de Argentina. Secretaría de Política Económica. Dirección de análisis de gasto público y programas sociales.

ejecución del presupuesto, permite revisar los gastos en salud, educación y los demás componentes de la inversión social, dentro de un contexto del gasto público global¹⁶.

En términos generales, las diferencias se encuentran en la definición de los recursos que efectivamente son clasificados como gasto social y los criterios bajo los cuales son registrados los datos. Por ejemplo, la OECD registra el gasto social neto, mientras que en Brasil las cifras corresponden a los recursos brutos destinados al sector social.

A fin de contar con una definición común para los distintos países de la región, en el presente documento se considera como gasto social al *monto de recursos destinados al financiamiento de los planes, programas y proyectos cuyo objetivo es generar un impacto positivo en algún problema social, independientemente de la entidad administrativa y el sector que realiza cada función (educación, salud y nutrición, seguridad social, asistencia social, trabajo, vivienda, agua y saneamiento), de la fuente de financiamiento (pública, cofinanciamiento de los “beneficiarios”, donación privada o donación del exterior) y de la partida de costos a que se destinan (gastos corrientes y de capital).*

En algunos casos no es tan clara la frontera entre lo que se debe considerar como social y lo que corresponde propiamente al ámbito productivo. El criterio aquí utilizado incluye en lo social a los bienes y servicios que se entregan para el consumo de los hogares, dejando en el ámbito de lo productivo a aquellos que adquieren las empresas y que utilizan como insumos para otros procesos de producción. Esta diferenciación es central, por ejemplo, en los programas agua y saneamiento y los de apoyo a la microempresa.

Otro ámbito que requiere diferenciación es entre lo social y lo que se refiere al ámbito privado de la satisfacción autónoma de necesidades y gustos de los hogares. Una posibilidad es considerar como sociales todos aquellos consumos en que por ley, forzosamente, están incurriendo los hogares, en el entendido de que están definidos así sobre la base de que siendo individuales, persiguen el bien superior del conjunto de la sociedad. Por ejemplo, cuando un sistema contributivo obliga a cotizar en algún sistema de seguro de salud (estatal o privado), destinando para ello un monto de dinero determinado (fijo o variable en función del ingreso). Sin embargo, esto no resuelve el caso en que no hay fijación de montos (totales o mínimos), como por ejemplo: en la selección de servicios en la educación, donde todos los recursos pueden ser destinados al sector privado, en cuyo caso se requiere contabilizar tanto las cuentas del sector público como las del privado para cada sector social; o el caso de la vivienda, que no presenta mayor dificultad cuando es financiada con fondos públicos y se orienta a grupos vulnerables, pero cuyos límites no son claros cuando es financiamiento privado. El análisis de estos límites pudiera ser objetivo de análisis y estudios posteriores que permitan complementar este trabajo.

Cuando se habla de agente privado, generalmente se asocia a las empresas que entregan servicios sociales, sin embargo, dentro de esta categoría se encuentran también las Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLH) que tienen una función similar al gobierno en orden a brindar apoyo a los individuos, pero administrativa y económicamente dependen de recursos no públicos.

Finalmente, cabe preguntarse si se debe incluir el gasto administrativo, investigación y rectoría que soportan el diseño e implementación de las políticas sociales. La información oficial de los países no siempre es clara al respecto y la OECD (1996)¹⁷ no lo incluye, debido a que considera que este tipo de gasto no va directamente a los beneficiarios. Sin embargo, para que el análisis sea realmente exhaustivo, dichos montos sí deben ser considerados, clasificándolos luego según las

¹⁶ Ministerio de Hacienda. Informes financieros, web. 2006.

¹⁷ OECD, Labour market and social policy. Occasional papers N° 17 Social Expenditure Statistics of OECD Members countries. Provisional version. Paris, 1996.

dimensiones que más abajo se presentan. En cambio, quedan fuera de esta medición los gastos relativos a transacciones financieras, los pasivos, revalorizaciones y otro tipo de transacción similares.

4. La clasificación del gasto social

Para la clasificación del gasto público se utilizan diferentes enfoques, muchas veces complementarios. El Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI (EFP, 2001), concentra la clasificación del gasto en los enfoques administrativo, económico y funcional, que resultan ser los más utilizados a nivel de finanzas públicas. En conjunto, buscan determinar quien, cómo y para qué se destinan los recursos.

- La clasificación administrativa, institucional, o por origen del gasto tiene por objeto facilitar el manejo y gestión administrativa de los recursos destinados a cada repartición pública. Así, presenta los gastos de acuerdo a las unidades administrativas del Gobierno, es decir desde el punto de vista de quien ejecuta los recursos.
- La clasificación económica se refiere a una clasificación del gasto según la naturaleza de la transacción, esto es, con o sin contraprestación, con fines corrientes o de capital, clases de bienes y servicios obtenidos, y sector o subsector que recibe las transferencias. Generalmente se utiliza para identificar la naturaleza y los efectos económicos de las operaciones del Gobierno. Permite identificar cómo se gastan los recursos públicos: en el mantenimiento y operación del sector público o en la inversión de capital y creación de infraestructura.
- La clasificación funcional o destino del gasto se refiere a la clasificación del gasto según las funciones de la administración pública, que es la norma internacional para clasificar los gastos de gobierno de acuerdo con propósitos generales para los cuales se realizan transacciones. Generalmente se utiliza para medir la asignación de recursos por parte del Gobierno con el objeto de promover distintas actividades y objetivos. Pueden integrar las funciones, programas, actividades y proyectos a los que son destinados los recursos.

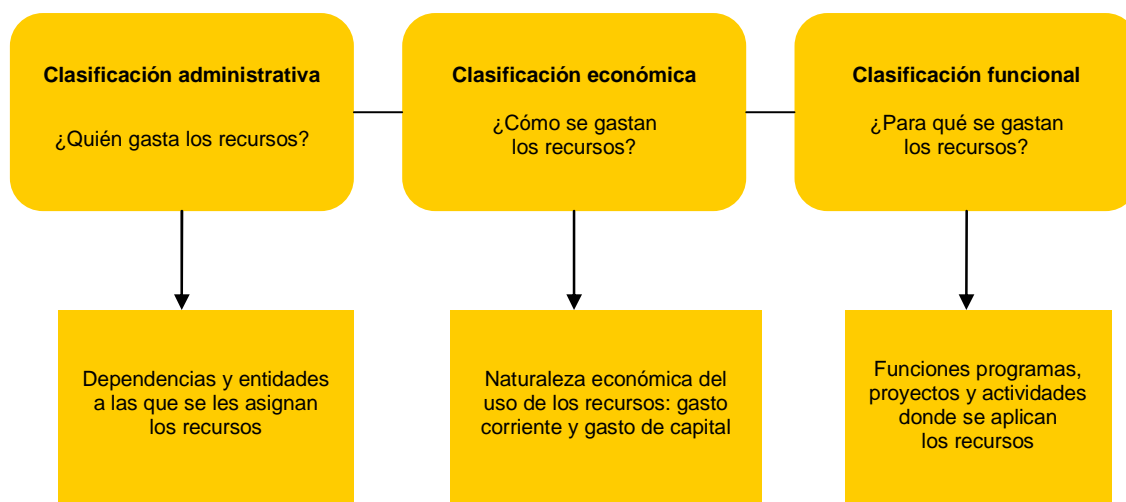
Las diferentes formas de clasificación no son excluyentes sino complementarias, vinculándose entre sí para proporcionar información de mayor valor agregado. Cada enfoque se concentra en una aproximación particular del presupuesto y su ejecución, respondiendo a objetivos diferentes, pero que tienen conexión. Por ejemplo, un cruce entre información proveniente de la clasificación administrativa y funcional permitiría ilustrar que funciones, programas y/o actividades realizan determinados organismos del sector público.

En el diagrama 3 se resumen estos modelos de clasificación del gasto público.

El mecanismo más difundido para la clasificación del gasto público social corresponde al enfoque *funcional*. En general, cuando los países presentan sus estadísticas de gasto social lo hacen usando este enfoque de clasificación, según la función que cumplen los recursos destinados de acuerdo a sus propios criterios y objetivos, por ejemplo, asuntos económicos, educación, salud y protección social. A partir de esta clasificación, cada función puede desagregarse de acuerdo a la disponibilidad de datos en cada país y/o necesidades de análisis.

Este ordenamiento permite observar la proporción de recursos asignados a cada sector social, reflejando, en cierto modo, las prioridades de inversión del Gobierno y facilitando la identificación del impacto de los recursos de acuerdo a los objetivos propuestos. Sin embargo, normalmente sólo reflejan los gastos del gobierno y no del conjunto de los agentes que participan en el financiamiento y ejecución de los recursos destinados a financiar los planes, programas y proyectos sociales.

DIAGRAMA 3
CLASIFICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO



Fuente: "Manual sobre la clasificación del gasto público federal en México", programa de presupuesto y gasto público, CIDE, 2001.

Entre las clasificaciones internacionales que permiten unificar criterios, en lo relativo a temas sociales destaca el Clasificador de las Funciones del Gobierno (COFOG por sus siglas en inglés), elaborado por la OECD y publicado por la división de estadísticas de las Naciones Unidas en el año 2000¹⁸. Este clasificador está estructurado en tres niveles: divisiones, grupos y clases. Las divisiones pueden ser vistas como los objetivos generales o funciones del gobierno, en tanto los grupos y clases detallan los medios por los cuales se puede lograr tales objetivos.

Las divisiones son diez: servicios públicos generales, defensa, orden público y seguridad y asuntos económicos, más las siguientes seis que corresponden a funciones sociales:

- **Salud:** Considera los productos, útiles y equipo médicos, servicios para pacientes externos, servicios hospitalarios, servicios de salud pública, investigación y desarrollo relacionados con la salud y las demás categorías que no se encuentren especificadas en las categorías anteriores.
- **Educación:** Considera enseñanza preescolar y enseñanza primaria, enseñanza secundaria, enseñanza postsecundaria no terciaria, enseñanza terciaria, enseñanza no atribuible a ningún nivel, servicios auxiliares de la educación, investigación y desarrollo relacionados con la educación y finalmente una categoría que incluya los servicios de educación no incluidos anteriormente.
- **Protección social:** Incluye seguridad social del empleado y asistencia social general, destinada a cubrir el ingreso en casos de enfermedad e incapacidad, edad avanzada, supérstites o sobrevivencia, familia e hijos, desempleo, exclusión social n.e.p., investigación y desarrollo relacionados con la protección social y otras funciones de protección social no especificadas anteriormente.
- **Vivienda y servicios comunitarios:** Contempla urbanización, desarrollo comunitario, abastecimiento de agua, alumbrado público, investigación y desarrollo relacionado con la vivienda y los servicios comunitarios y finalmente vivienda y servicios comunitarios no especificados anteriormente.

¹⁸ <http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regct.asp>.

- Actividades recreativas, cultura y religión: Reúne a servicios recreativos y deportivos, servicios culturales, servicios de radio y televisión y servicios editoriales, servicios religiosos y otros servicios comunitarios, Investigación y desarrollo relacionados con esparcimiento, cultura y religión y las otras categorías no especificadas anteriormente.
- Protección del medioambiente: Considera la ordenación de desechos, aguas residuales, reducción de la contaminación, protección de la diversidad biológica y del paisaje, investigación y desarrollo relacionado con la protección del medio ambiente, además de una nueva categoría que incluya aquellas actividades no especificadas en otra parte.

5. Dimensiones de análisis

Para tener un análisis detallado y exhaustivo del gasto social, además de las clasificaciones antes expuestas, se requiere considerar atributos relacionados con las características de la política social, sus objetivos, su modelo de gestión y grupos poblacionales a quienes son destinados los recursos. Con este fin, a continuación se presenta una lista de dimensiones que sería recomendable considerar:

- Función: En concordancia con las divisiones del COFOG, aquí se incluyen las siguientes funciones: educación, salud, protección social, vivienda, agua potable y alcantarillado, deporte y recreación, protección del medioambiente entre otros¹⁹.

Aun cuando a primera vista los límites parecen claros, no siempre es tan fácil diferenciar el gasto social destinado a una dimensión específica, particularmente en los casos de programas y proyectos integrales que contienen más de un objetivo de impacto. Ejemplos de ello son: los programas de nutrición infantil y escolar, que tienen impactos tanto en nutrición, salud y educación, abastecimiento de agua y servicios de alcantarillado y el alumbrado público con energías renovables. Esto debe tenerse presente al momento de agruparlas a fin de no producir doble contabilidad.

- Sector social: No todas las funciones indicadas tienen una traducción directa con una unidad administrativa a cargo. Una unidad puede tener varias funciones y viceversa.

Los sectores que más se relacionan con las funciones sociales antes indicadas son: educación, salud, desarrollo social, trabajo, vivienda, obras públicas.

Complementariamente, puede haber unidades que aparentemente no tienen relación con los temas sociales, así por ejemplo, las actividades de educación básica y media que se ejecutan en ámbito de las fuerzas armadas forman parte de la función educación aun cuando presupuestariamente aparezcan en instituciones de la defensa.

- Receptores: La identificación de quienes reciben los bienes y servicios que se distribuyen es central para profundizar el análisis. Estos se pueden agrupar según nivel de ingresos, edad, localización geográfica, sexo, grupo cultural-étnico u otra característica.

Cabe destacar que los receptores, o beneficiarios, pueden no necesariamente coincidir con la población objetivo definido en los programas y proyectos sociales. Para avanzar en ello se requiere contar con el análisis de la focalización que normalmente se hace en las evaluaciones de procesos y de impacto.

- Tipo de productos: Para un mismo objetivo de impacto se pueden destinar distintos bienes o servicios, a la vez que éstos pueden generar impacto en distintas dimensiones sociales. Por tal motivo, para un correcto análisis de los procesos de gestión social, se requiere la

¹⁹ Para mayor detalle sobre el límite de cada una de las categorías consideradas, ver anexo 1.

mayor especificidad posible de información sobre los tipos de productos que son financiados con el gasto social.

La variedad de tipos de productos no es finita, por lo que categorizarlos puede resultar restringido. Sin embargo, algunos se pueden agrupar al interior de cada función. Así por ejemplo, en salud se pueden agrupar por servicios de atención primaria, secundaria o terciaria, intervenciones quirúrgicas, vacunaciones, campañas comunicacionales, etc.

- Fuente de financiamiento: ingresos del gobierno (central, regional y/o local), transferencias de privados al gobierno, fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, inversión privada en empresas que ofrecen servicios sociales en el mercado o vía concesiones, financiamiento total o parcial de los hogares como “beneficiarios” o demandantes de servicios vía pago de servicios y/o seguros, créditos internos o externos y transferencias del exterior.

Esta dimensión permite conocer el peso que tienen los componentes contributivos y no contributivos, obligatorio y voluntario, de capitalización individual y fondos solidarios, etc.

- Agente ejecutor: gobierno general, sociedades “privadas” no financieras, instituciones sin fines de lucro (fundaciones, ONG’s y asociaciones de la sociedad civil), organismos internacionales y hogares.

Así, al hablar de gasto social no corresponde referirse exclusivamente al GPS sino al que es financiado y ejecutado por los distintos agentes: públicos, privados, internos o externos, como se plantea en la nueva definición presentada en la sección 3 de este capítulo, cuyo fin es la satisfacción de necesidades sociales. La clasificación conjunta de fuente de financiamiento y ejecutor permite a su vez identificar los flujos de recursos entre los distintos agentes.

- Destino: Coincidente con la lógica del proceso productivo de la gestión social, la operacionalización de la política social conlleva la implementación de procesos principales y de apoyo, en los cuales participan distintas unidades administrativas. Así, cabe distinguir entre el gasto social destinado a los procesos de producción de bienes y servicios y el utilizado por las unidades dedicadas en aquellos procesos que permiten mantener la infraestructura organizacional de base, como son los que suponen las funciones de rectoría, supervisión, asesoría, etc.

Consecuente con ello, el gasto social total (bruto) se puede desagregar entre gasto social destinado a la producción (o neto) y al apoyo administrativo. En caso de no contar con información primaria que permita determinar el destino de los recursos en cada uno de los procesos, el gasto social efectivo se puede estimar en base al valor económico que representan los productos a la luz del precio que tienen estos en el mercado. Si el mercado presenta distorsiones por subsidios u otros, éstos deberán ser utilizados para ajustar dicha estimación.

- Partida de costos: De acuerdo al tipo de insumos adquiridos con los recursos del gasto social, éstos se pueden diferenciar entre aquellos destinados a la inversión en bienes de capital y los de operación, o gastos corrientes.
- Objetivo de impacto: Cada una de las funciones indicadas puede tener distintos objetivos de impacto, por ejemplo morbilidad y mortalidad en salud, nivel y calidad en educación, etc.

Esta categorización no es finita y por tanto no cabe definirla ex-ante, a la vez que progresivamente se avanza en la implementación de políticas integrales que contienen distintos objetivos. Sin embargo, avanzar en ella es central para un análisis adecuado de los resultados.

